

Nota editorial

«La Constitución abordó la cuestión nacionalista con una voluntad integradora que hoy aparece como su rasgo esencial. Muchos nacionalistas (al igual que algunos sectores de la izquierda) aceptaron la Constitución como paso previo para objetivos ulteriores (una España federal, la independencia, la revolución social). Pero una vez asentada la democracia comprendieron que el modelo definido por la Constitución y los Estatutos era el único compatible con el pluralismo realmente existente. Y aunque la influencia del terrorismo haya interferido en ese proceso, en conjunto puede decirse que ha sido un éxito: nos ha evitado tragedias como la de los Balcanes; ha estabilizado un marco que hace posible resolver crisis políticas mediante elecciones, sin que el cambio de Gobierno arrastre el del sistema. Nada de eso podía darse por supuesto hace 25 años”.

De este modo editorializaba el diario *El País* su edición especial conmemorativa de los 25 años de la muerte de Franco en noviembre del año 2000, que incluía una encuesta reveladora del abrumador aprecio que los españoles sentían por la Constitución y por la Transición. “Aquella remota dictadura”, se podía leer en su portada.

Apenas quince años después, lo que entonces parecía remoto se ha convertido en el argumento omnipresente del discurso político diario del nacionalismo y de amplísimos sectores de la izquierda en

toda España. Han recuperado la idea de no reconocer el pluralismo realmente existente y actúan para lograr objetivos que resultan incompatibles con este, porque lo juzgan ilegítimo en todo lo que no coincide con ellos: de nuevo la España residual, la independencia y la revolución social.

No estamos ante un problema territorial, estamos ante un asalto al sistema de democracia europea que se materializa allí donde puede. Y donde puede es donde se han debilitado las instituciones. Un asalto que tiene hoy en Cataluña su principal foco, pero que no es comprensible sin tener a la vista la trayectoria de la izquierda española en los últimos años en muchos otros lugares. El trabajo de fondo desarrollado por sus líderes a lo largo de los años ochenta y noventa, del que da testimonio el citado editorial, ha sido ya esencialmente revertido por una nueva generación que ha rechazado como estigma su participación en el proceso constituyente, una vez asumida la versión de la historia patrocinada por los movimientos antisistema a los que decidió cortejar a partir de 2004.

La idea de que es desde el centro-derecha desde donde se soporta mal la diversidad española merece alguna explicación, porque la realidad es que ha sido siempre la legitimidad de aquella la que ha sido puesta en cuestión, sin que por su parte se haya impugnado nunca el modelo territorial consensuado en la Constitución. Gabriel Cisneros, a la luz de los

procesos políticos disgregadores que se iniciaban, escribió en 2003 que “la propia naturaleza del consenso implica renunciaciones, que nos obligan a aceptar el texto de la Constitución en su conjunto, incluyendo lo que no nos gusta. Y, avanzando un paso más, hay que añadir la necesidad de adherirnos expresamente a lo que no nos satisface, en aplicación de los principios de pluralismo”. Es verdad.

Hoy, la amenaza del enfrentamiento civil se ha hecho real en Cataluña. Quizás esta primera fase de desbordamiento secesionista impide ver por ahora la realidad de una Cataluña plural profundamente fracturada, pero esa fractura se hará presente y tendrá consecuencias que no serán menores. Los acontecimientos del día 1 de octubre han proporcionado al secesionismo un instrumento de compactación instantáneo, pero quizás menos resistente en el medio y largo plazo de lo que hoy puede parecer.

Se ha desestabilizado un marco común probado, que hacía posible resolver crisis políticas mediante elecciones, y desde el Gobierno de la Generalitat se ha arrastrado al sistema hacia su destrucción. Un marco institucional que era especialmente útil para los catalanes, para su libertad y para sus intereses, porque no solo han tomado parte activa en sus instituciones autonómicas, sino que en buena medida han orientado el gobierno de España desde 1978, y lo han hecho a su favor.

Hoy, todo esto parece dar igual, pero esa historia existe, aunque en los últimos años se haya desarrollado a conciencia el trabajo de apartar de ella a sus verdaderos protagonistas, los catalanes. No estamos ante un proceso natural, estamos ante las consecuencias de un empuje político que es necesario contrarrestar.

Poco después de aquel año 2000, con respecto a Cataluña el CIS dejó constancia de un sistema auto-

nómico plenamente estabilizado y había un rendimiento electoral nacionalista limitado y decreciente. Se registraba entonces allí una excelente opinión sobre el Estado autonómico, sobre el rendimiento de las instituciones y sobre los acuerdos políticos que se habían producido desde 1978, los últimos muy recientemente, que en lo esencial daban leal continuidad a la exigencia conciliadora y consensual de los acuerdos constituyentes y al espíritu del Título VIII de la Constitución, en el marco establecido por el Tribunal Constitucional y en los términos que Cisneros solicitaba, con expresa adhesión al modelo.

En los últimos treinta años, la menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996 (11%), 1998 (11,5%) y 2002 (12,1%). En 2006 alcanzó el 17,5%; en 2015, el 23,6%.

Esto no es, pues, la desembocadura de un proceso histórico de origen lejano, sino los efectos un desafío reciente que altera un curso histórico brillante, así considerado por la inmensa mayoría hasta hace bien poco. Nuestros problemas no tienen cuarenta años. Lo que vemos hoy no es el “ser” de Cataluña, las actitudes políticas han sido otras allí durante mucho tiempo y pueden volver a serlo.

Con frecuencia se tiende a mirar los acontecimientos políticos inmediatos proyectando sobre ellos grandes visiones que deslizan los problemas políticos hacia un esencialismo de memoria noventa-yochista poco útil y más bien distorsionador, porque nos impide vincular causas y efectos, acciones y resultados, decisiones y consecuencias, personas y sucesos. La realidad es que en España el modelo autonómico, con los mismos problemas que el paso del tiempo imprime en cualquier sistema político —recuérdese que Alemania abordó no hace mucho una reforma profunda de su modelo federal— funcionaba bien hasta hace algunos años. Era un éxito, uno más del modelo político de 1978.

Era objeto de debates políticos, de diferencias y de confrontaciones ordinarias; a nadie satisfacía plenamente, pero funcionaba como marco útil de resolución revisable de conflictos entre partidos, territorios y poblaciones.

La degeneración de ese modelo hasta acabar en el momento insurreccional que actualmente vivimos no estaba incoada ni en la Constitución ni en los acuerdos que fundaron nuestra democracia hace cuarenta años, que fueron principalmente dos: 1) suscitar concordia entre españoles haciendo memoria completa del pasado, para no hacer política divisiva con él en el futuro; y 2) asumir la presencia de partidos nacionalistas dentro del sistema y un generoso marco de ejercicio competencial autonómico a cambio de la participación leal en las instituciones comunes.

La voluntad de terminar con esos dos pactos y la incapacidad para restaurarlos explican cómo se ha llegado hasta aquí. No desde la Carrera de San Jerónimo de Madrid, sino desde el Salón del Tinell de Barcelona, a donde hoy se pretende regresar.

Muchos parecen olvidar que todo lo que se está destruyendo se asienta en el diálogo, en el respeto a la diferencia, en la capacidad de negociación y de integración. Y que carece de sentido poner fin a uno de los mayores logros de todas esas virtudes cívicas invocándolas una vez más, dando por buena la idea de que no han estado presentes entre nosotros. Lo han estado, en grado sumo. Dialogar para destruir no es lo mismo que dialogar para construir. ¿Diálogo, para qué?

Estamos ante la trampa de afirmar que quienes hemos defendido la Constitución defendíamos un texto escrito a nuestro capricho. Un texto que respondía solo a nuestras preferencias.

La realidad es que defender la Constitución ha sido defender un ámbito de convivencia, alcanzado

por todos y para todos como fruto de renunciar a muchas cosas importantes. Cada uno a las suyas. Eso es lo que aprendimos de nuestra historia; esa enseñanza es la que supimos llevar a nuestra Constitución en 1978.

Pero ahora es inevitable constatar que el coste –en términos de bienestar y de racionalidad jurídica y económica– del deslizamiento de nuestro modelo territorial inducido por la deslealtad de muchos es, sencillamente, insostenible. Que todo ese inmenso esfuerzo intergeneracional haya terminado por ser despreciado del modo en que lo ha sido debe hacernos reaccionar.

Esa reacción debe pasar, primero, por una apelación a la nación española. Y luego, por una inaplazable reflexión de fondo sobre el mejor modo de organizarnos políticamente atendiendo a nuestros legítimos intereses como españoles. Un secesionismo que al mismo tiempo que exige mejorar su posición deja claro que no respetará los compromisos a los que se pueda llegar, y que en el mejor de los casos considerará cualquier acuerdo como una gran disposición transitoria sujeta a lo que pueda convenir a su capricho, no debe volver a ocupar nuestro tiempo dentro de ese proceso.

Somos una inmensa mayoría los españoles que hemos trabajado siempre a favor de un proyecto anclado firmemente en los valores constitucionales, animado por el espíritu de la Transición que nos devolvió a la convivencia en libertad. Abiertos a la pluralidad y convencidos también de que lo común, lo que nos une, es más que la suma de las partes.

La credibilidad y la solidez de ese proyecto han merecido la confianza y el sacrificio de los españoles, pero hoy asisten atónitos a una tormenta de agravios sin respuesta como recompensa a su voluntad de integración. Y necesitan con urgencia que se les

ofrezca un camino razonable para defender, restaurar y continuar juntos esa obra común, moralmente irreprochable y cívicamente portentosa, que es la democracia española.

Se han hecho grandes esfuerzos por incluir en el acuerdo a todos, incluso a quienes más exigen y menos están dispuestos a ofrecer. Pero ya que el secesionismo nos ha dejado claro lo que podemos esperar de él hagamos lo que hagamos, ha llegado el momento de abordar una reforma que nos permita tener un Estado más ordenado, más eficiente, más justo, liberado de ese inmenso lastre. Un Estado que asegure nuestro bienestar, que nos dé mejores servicios y que fortalezca una sociedad de oportunidades para todos los españoles.

El pacto constitucional ha sido destruido. Todos volvemos a la casilla de salida, y volvemos con lo que hemos aprendido. No partimos de lo que hay para ver cómo seguimos cediendo, partimos de cero para dejar de ceder.

Es necesario forjar un nuevo pacto en el que conservemos todo lo bueno del anterior y en el que proyectemos también las enseñanzas de la etapa histórica que ahora termina. Ese es el camino para poner fin al debilitamiento y a la frustración, el camino para transformar el cúmulo de sentimientos negativos que ahora experimentamos en energía transformadora y constructiva.

Hemos asumido las exigencias recíprocas del consenso y de la convivencia, hemos hecho nuestra parte; no debemos asumir el precio de la deslealtad. La deslealtad debe pagarla el desleal.

Si hay que reformar nuestro modelo, será para reafirmar los principios de la España constitucional, no para otra cosa.

Para reafirmar la igualdad de todos los españoles independientemente de donde nacen o de donde viven, no para otra cosa.

Para reafirmar la libertad de todos y cada uno de nosotros frente a los chantajes, las imposiciones y las maniobras de exclusión, no para otra cosa.

Para reafirmar la supremacía de la ley como garante de nuestros derechos y como baluarte frente al totalitarismo supremacista del nacionalismo de izquierda o de derecha, no para otra cosa.

Para reafirmar la solidaridad entre españoles, para que nadie quede al margen del progreso y de las oportunidades, y no para otra cosa.

Hay que reformar para reafirmar los fundamentos de una España fuerte y moderna frente a quienes, una vez más, quieren hacer de España el escenario de una contienda civil que nos devuelva a los peores momentos de nuestra historia. No será así.